



# Asamblea General

Distr. general  
28 de enero de 2014  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos

### Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

## Documento posterior al período de sesiones

101º período de sesiones (4 a 13 de noviembre de 2013)

### I. Introducción

1. En el presente documento se recogen las actividades realizadas y las comunicaciones y los casos examinados por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante su 101º período de sesiones, celebrado del 4 a 13 de noviembre de 2013.

### II. Actividades

2. El 8 de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo celebró una consulta de expertos sobre las desapariciones forzadas y los derechos económicos, sociales y culturales. En el transcurso de este debate de medio día de duración, expertos de diversas regiones del mundo intercambiaron opiniones sobre la indivisibilidad de los derechos humanos y la relación entre las desapariciones forzadas y los derechos económicos, sociales y culturales. El Grupo de Trabajo informará sobre este asunto al Consejo de Derechos Humanos en 2014.

### III. Comunicaciones

3. Entre sus períodos de sesiones 100º y 101º, el Grupo de Trabajo transmitió 18 casos en virtud de su procedimiento de acción urgente a los Emiratos Árabes Unidos (1), el Iraq (7), Nepal (1), el Pakistán (1), el Perú (1), la República Árabe Siria (4) y el Yemen (3).

4. En su 101º período de sesiones, el Grupo de Trabajo decidió transmitir a 10 Estados 41 nuevos casos denunciados de desaparición forzada. El Grupo de Trabajo también esclareció 15 casos relativos a la Arabia Saudita (1), Chile (5), los Emiratos Árabes Unidos (1), Namibia (1), el Pakistán (2), la República Árabe Siria (2) y Sri Lanka (3). De estos 15 casos, 8 se esclarecieron a partir de la información proporcionada por los gobiernos y 7 gracias a la información facilitada por las fuentes.

GE.14-10647 (S) 260214 270214



\* 1 4 1 0 6 4 7 \*

Se ruega reciclar



5. Entre sus períodos de sesiones 100° y 101°, el Grupo de Trabajo transmitió 6 comunicaciones en virtud de su procedimiento de intervención inmediata, de manera conjunta con otros mecanismos de los procedimientos especiales, a Argelia (2), Colombia (2) y Kenya (2). El Grupo de Trabajo también transmitió 7 llamamientos urgentes, conjuntamente con otros mecanismos de los procedimientos especiales, relativos a personas que habían sido arrestadas, detenidas, secuestradas o privadas de su libertad de otra manera, o que habían sido víctimas de desaparición forzada o estaban peligro de serlo, en Bahrain, China, la Federación de Rusia, Kazajstán, la República Árabe Siria y el Sudán.

6. Durante su 101° período de sesiones, el Grupo de Trabajo transmitió cinco denuncias generales relacionadas con Colombia, Guatemala, Indonesia, Marruecos y México.

#### **IV. Información relativa a las desapariciones forzadas o involuntarias en los Estados examinados por el Grupo de Trabajo durante el período de sesiones**

##### **1. Albania**

###### **Información facilitada por el Gobierno**

7. El 25 de octubre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a un caso pendiente. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer el caso.

###### **Información facilitada por las fuentes**

8. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente.

##### **2. Argelia**

###### **Carta de intervención inmediata**

9. El 20 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una carta de intervención inmediata en relación con el presunto empleo de fuerza excesiva contra familiares de víctimas de desapariciones forzadas, y la posterior detención de estas personas, durante una manifestación pacífica celebrada el 27 de junio de 2013 con ocasión del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

10. El 18 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una nueva carta de intervención inmediata en relación con el presunto empleo de fuerza excesiva contra familiares de víctimas de desapariciones forzadas, y la posterior detención de estas personas, durante una manifestación pacífica celebrada el 29 de septiembre de 2013. La manifestación se había convocado para protestar contra las disposiciones de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional.

###### **Información facilitada por el Gobierno**

11. El Grupo de Trabajo siguió tramitando la información que había transmitido el Gobierno el 5 de febrero de 2013. Durante el período de sesiones se examinó la información relativa a 100 casos pendientes, que se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

###### **Información facilitada por las fuentes**

12. Las fuentes facilitaron información sobre siete casos pendientes.

### **Observaciones**

13. Con respecto al presunto empleo excesivo de la fuerza contra familiares de víctimas de desapariciones forzadas a que se alude en las cartas de intervención inmediata, el Grupo de Trabajo desea manifestar su profunda preocupación y recordar la resolución 21/4 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo instó a los Estados a que adoptaran medidas para proteger adecuadamente, entre otros, a los defensores de los derechos humanos y a las familias de las personas desaparecidas contra todo acto de intimidación, persecución, represalia o malos tratos de que pudieran ser objeto.

## **3. Angola**

### **Información facilitada por el Gobierno**

14. El 8 de julio de 2013, el Gobierno respondió a una carta de intervención inmediata enviada el 10 de junio de 2013 en relación con el presunto encierro en régimen de aislamiento del Sr. Emiliano Catumbela ("Ticreme") y con la detención arbitraria y las medidas policiales excesivas de que supuestamente habrían sido objeto otros ocho defensores de los derechos humanos durante su participación en una vigilia. En su respuesta, el Gobierno indicó, entre otras cosas, que "el Sr. Emiliano Catumbela, alias Ticreme, de 22 años de edad, fue puesto en libertad el martes 25 de junio de 2013 por decisión del Fiscal General de la República adscrito a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y aguardará en libertad la celebración del juicio en que tendrá que responder de los cargos" que se le imputan.

15. El 30 de septiembre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a dos casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

16. En la misma comunicación, el Gobierno respondió nuevamente a la citada carta de intervención inmediata. Entre otras cosas, el Gobierno indicó lo siguiente: "Sucedió que, durante las protestas, algunos manifestantes se sublevaron contra las fuerzas del orden. Uno de ellos incluso alcanzó a un agente en la cabeza con una botella rota. A raíz de ello, seis manifestantes fueron conducidos a dependencias policiales, donde se dio curso al procedimiento N° 2176/13-MA, que culminó con la detención del ciudadano Emiliano Catumbela Lumbugululo por el delito de intento de homicidio, con arreglo a los artículos 11, 106 y 349 del Código Penal".

### **Observaciones**

17. El Grupo de Trabajo desea dar las gracias al Gobierno por las respuestas que ha dado a la carta de intervención inmediata. El Grupo de Trabajo acoge con reconocimiento la información de que el Sr. Catumbela fue puesto en libertad el 25 de junio de 2013. A ese respecto, desea recordar el artículo 2 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, donde se establece que ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas.

## **4. Argentina**

### **Información facilitada por el Gobierno**

18. El 6 de agosto de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a un caso pendiente inscrito en las estadísticas del Perú. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer el caso.

19. El Grupo de Trabajo decidió suspender la aplicación de la norma de los seis meses con respecto a un caso.

## **5. Bahrein**

### **Llamamientos urgentes**

20. El 28 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un llamamiento urgente relativo a la detención arbitraria, las torturas y los malos tratos de que presuntamente habrían sido objeto la Sra. **Rihanna al-Musawi** y la Sra. **Nafeesa al-Asfoor**, a la falta de salvaguardias judiciales que supuestamente padecieron estas personas mientras permanecieron privadas de libertad, y a la presunta detención arbitraria del Sr. **Abas al-Asfoor**, que actualmente se encuentra en paradero desconocido.

## **6. Belarús**

### **Información facilitada por el Gobierno**

21. El 24 de octubre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a tres casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

### **Observaciones**

22. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno de Belarús siga cooperando con el mecanismo. A ese respecto, el Grupo de Trabajo desea recordar la resolución 21/4 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo instó a los Estados a que cooperasen con el Grupo de Trabajo para ayudarlo a desempeñar eficazmente su mandato, y la resolución 7/12, en la que el Consejo instó a los gobiernos que correspondiera a que intensificasen su cooperación con el Grupo de Trabajo respecto de toda medida adoptada en aplicación de las recomendaciones que les hubiera dirigido.

## **7. República Centroafricana**

### **Comunicado de prensa**

23. El 5 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo publicó un comunicado de prensa sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana. En el comunicado de prensa, los expertos instaron a las autoridades actuales a que adoptaran medidas inmediatas para poner fin a todas las violaciones de los derechos humanos, entre ellas las desapariciones forzadas, y para que los culpables no gozaran de impunidad.

### **Observaciones**

24. En relación con la nota de prensa, el Grupo de Trabajo desea reiterar su profunda preocupación ante las denuncias de desapariciones forzadas en el país. El Grupo de Trabajo desea recordar el artículo 2 de la Declaración, donde se establece que "ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas".

## **8. Chile**

### **Esclarecimiento**

25. Gracias a la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer cinco casos pendientes tras la expiración del período prescrito por la norma de los seis meses.

## 9. China

### Llamamientos urgentes

26. El 9 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un llamamiento urgente relativo al cuadro habitual de detenciones arbitrarias, maltrato de reclusos y encierro en régimen de aislamiento, así como de intimidación de defensores y activistas de los derechos humanos, que se manifestaba en todo el país.

27. El 1 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un segundo llamamiento urgente, relativo a dos personas a las que al parecer se había prohibido viajar a Ginebra para asistir a un seminario de formación sobre los mecanismos de las Naciones Unidas, y a la denuncia de que una de esas personas habría sido objeto de una desaparición forzada.

28. El 22 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un tercer llamamiento urgente, relativo a la detención y encierro de 20 personas, algunas de las cuales habían desaparecido, en relación con su participación en reuniones pacíficas o campañas a favor de los derechos humanos en diversos lugares del país.

### Comunicado de prensa

29. El 16 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo publicó un comunicado de prensa referido a las represalias presuntamente dirigidas contra activistas en relación con el examen periódico universal. En el comunicado de prensa, los expertos manifestaban su honda preocupación ante las noticias de que unos defensores chinos de los derechos humanos habían sido objeto de represalias por haber querido participar en un importante examen de la situación de los derechos humanos en China realizado por las Naciones Unidas. Preocupaba en particular al Grupo de Trabajo que la detención de una de esas personas no se hubiera comunicado a los familiares del interesado.

### Observaciones

30. En relación con el comunicado de prensa, el Grupo de Trabajo desea recordar el artículo 10 de la Declaración, donde se establece que: "Se deberá proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de [toda persona privada de libertad] y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lugares de transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad".

## 10. Colombia

### Carta de intervención inmediata

31. El 2 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una carta de intervención inmediata relativa a las amenazas de muerte de que presuntamente fueron objeto miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio (ASORVIMM) tras una ceremonia celebrada los días 5 y 6 de julio de 2013, en el transcurso de la cual se recibieron los restos de algunos desaparecidos.

32. El 13 de septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió otra carta de intervención inmediata, referida al presunto homicidio de un abogado y a los actos de intimidación y estigmatización y las amenazas de muerte de que supuestamente habrían sido objeto varios abogados que se dedicaban a casos de vulneración de los derechos humanos, algunos de ellos desapariciones forzadas.

### Denuncia general

33. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas acerca de los obstáculos con que tropezaba la aplicación en Colombia de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

34. Según la información facilitada por la fuente, en Colombia sigue produciéndose un gran número de desapariciones forzadas. Según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al 31 de agosto de 2012, el total de desaparecidos había alcanzado las 74.361 personas, de las cuales 18.638 eran víctimas de una desaparición forzada.

35. Entre el 7 de agosto de 2010 y el 31 de agosto de 2012 se denunciaron 486 casos de presunta desaparición forzada. De esas personas, 40 fueron halladas muertas y 68 con vida. Aún no se conocen la suerte ni el paradero de 378 víctimas. Del total de personas cuya desaparición se ha denunciado, 104 son mujeres (el 25%), 382 son hombres (el 57%) y 73 son menores de edad (el 18%), de los cuales 33 son niñas y 40 niños.

36. La fuente indica que, si bien estas cifras resultan alarmantes, el total de víctimas de desapariciones forzadas en ese período podría ser incluso mayor, pues varias bases de datos del Estado no están totalmente centralizadas. A este respecto, la fuente señala, por ejemplo, que 7.000 denuncias de desaparición forzada presentadas en virtud de la Ley de justicia y paz (Ley N° 975/05) habrían quedado excluidas del Registro Nacional de Desaparecidos.

37. El Grupo de Trabajo también fue informado de que varios defensores de los derechos humanos habían sido víctimas de desapariciones forzadas en los últimos años. A ese respecto, se hizo referencia a la desaparición forzada en 2011 de seis defensores de los derechos humanos. La fuente menciona como ejemplo de desaparición forzada la del ecologista Miguel Ángel Pabón Pabón el 31 de octubre de 2012 en el Magdalena Medio. El Sr. Pabón era integrante del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y de los Afectados por Represas "Ríos Vivos". Se aludió a la presencia de una base militar y de grupos paramilitares en la zona donde había tenido lugar la desaparición. Otro ejemplo señalado por la fuente es el caso de Manuel Ruiz, líder del movimiento para la restitución de tierras, que desapareció junto con su hijo de 15 años el 23 de marzo de 2013. Los cuerpos de ambos fueron hallados cinco días después. Manuel Ruiz y su hijo habían sido detenidos por la policía antes de desaparecer supuestamente a manos de miembros de un grupo paramilitar.

38. Igualmente, se ha señalado que el Plan Nacional de Búsqueda no tiene la fuerza legal ni la eficacia necesarias para cumplir su cometido. A ese respecto, aunque al parecer gracias a la Ley N° 1408/2010 se han logrado avances con respecto al derecho a la información y a la participación de las víctimas de desapariciones forzadas, aún no se ha promulgado el decreto reglamentario relativo a dicha Ley. Además, las búsquedas de desaparecidos efectuadas no han dado los resultados esperados.

39. Asimismo, en la inmensa mayoría de los casos de desaparición forzada, los culpables quedan al parecer impunes. Se señala que la aplicación de la Ley de justicia y paz presenta graves carencias, y que los actos normativos del Gobierno y las resoluciones de la Procuraduría General de la Nación provocarían en la práctica un menoscabo aún mayor de los derechos de las víctimas, en contravención de lo establecido en la sentencia C-370 de la Corte Constitucional, emitida en 2006. Por ejemplo, las resoluciones 3398 de 2006 y 0387 de 2007 del Fiscal General de la Nación, y el Decreto N° 315 de 2007 limitan la participación de las víctimas en los procesos previstos en la Ley de justicia y paz.

40. Además, la Ley N° 1448, de 10 de junio de 2011, conocida como la ley de víctimas, a pesar de constituir un paso adelante en materia de protección de los derechos de los desaparecidos y sus familiares, excluye de su definición de víctima a los "miembros de los

grupos armados ilegales". Esto implica que, por ejemplo, los miembros de las guerrillas (reales o consideradas como tales) que hayan sido víctimas de la desaparición forzada no tendrían esa consideración, y que sus familiares quedarían privados de su derecho a una reparación y a la verdad. La fuente alega también que el llamado Marco Jurídico para la Paz contiene varias disposiciones contrarias al derecho de los familiares a la justicia.

41. Igualmente, la fuente indica que al parecer los miembros de organizaciones de familiares han sido objeto de constantes amenazas y agresiones. A este respecto, se señala que el 24 de enero de 2013 Martha Elena Díaz Ospina, fundadora y Presidenta de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor (AFUSODO), una organización que brinda apoyo a las madres de las víctimas de desapariciones forzadas a manos de los militares, y miembro de la seccional del atlántico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, recibió una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Entre julio y septiembre de 2012 se denunciaron varias amenazas dirigidas contra la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y sus miembros; también se denunciaron operaciones de vigilancia y toma de fotografías dirigidas contra la organización. La fuente señaló también que la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FNEB) y sus directivos habían sido al parecer objeto de reiteradas operaciones ilegales de espionaje. Por ejemplo, a finales de noviembre de 2012, la FNEB denunció ser objeto de seguimiento y vigilancia por un agente de policía y por un individuo que se desplazaba en un vehículo oficial. Pese a estar documentados y denunciados, estos incidentes al parecer no han sido investigados. La fuente subraya que la FNEB es objeto de protección estatal desde mediados de 2011.

#### Observaciones

42. Preocupa profundamente al Grupo de Trabajo el presunto homicidio de abogados dedicados a casos de desaparición forzada, o las amenazas de muerte dirigidas contra estos profesionales. A este respecto, el Grupo de Trabajo desea recordar el artículo 13 de la Declaración, según el cual "[s]e tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación [de una desaparición forzada], incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia" (párr. 3) y que "[s]e tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda" (párr. 5).

## 11. República Popular Democrática de Corea

#### Procedimiento ordinario

43. El Grupo de Trabajo transmitió 12 casos con arreglo a su procedimiento ordinario. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, el Gobierno de la República de Corea recibió copias de esos casos.

44. El primer caso se refería al Sr. **Gi-man Eom**, presuntamente secuestrado el 7 de agosto de 1968, cuando el *Deoksu-2 ho*, el barco pesquero en el que trabajaba, fue supuestamente capturado por fuerzas de la República Popular Democrática de Corea. El Sr. Eom era menor de 18 años en el momento de su presunto secuestro.

45. El segundo caso se refería al Sr. **Gwang-mo Jeong**, presuntamente secuestrado el 5 de junio de 1970, cuando el *I-2*, el buque de la armada en el que servía, fue supuestamente capturado por fuerzas de la República Popular Democrática de Corea.

46. El tercer caso se refería al Sr. **Dal-young Kim**, presuntamente secuestrado el 4 de febrero de 1972, cuando el *Anyoung 35-ho*, el barco en el que trabajaba, fue supuestamente

obligado por buques armados de la República Popular Democrática de Corea a entrar en aguas norcoreanas.

47. Los casos cuarto y quinto se referían al Sr. **Mu-su Nam** y el Sr. **Jeong-yeol Nam**, también conocido como Jeong-lyeol Nam, presuntamente secuestrados el 9 de junio de 1972, cuando el *Yupungho*, el barco pesquero en el que trabajaban, fue supuestamente capturado por fuerzas de la República Popular Democrática de Corea.

48. El sexto caso se refería al Sr. **Hyeob-ju Park**, presuntamente secuestrado el 15 de febrero de 1974, cuando el *Suwon-ho* 33, el barco pesquero en el que trabajaba, fue supuestamente capturado por fuerzas de la República Popular Democrática de Corea.

49. Los casos séptimo y octavo se referían al Sr. **Seung-min Choi**, menor de 18 años en el momento del presunto secuestro, y el Sr. **Min-kyo Lee**, presuntamente secuestrados en agosto de 1977 por un agente de la República Popular Democrática de Corea cuando se encontraban de vacaciones en la isla de Hongdo.

50. Los casos noveno y décimo se referían al Sr. **Young-shik Hwang** y el Sr. **Wan-sang Jeong**, presuntamente secuestrados el 6 de enero de 1971, cuando el *Huiyoung* 37, el barco pesquero en el que trabajaban, fue supuestamente capturado por fuerzas de República Popular Democrática de Corea en el mar Amarillo.

51. Los casos 11º y 12º se referían al Sr. **Byeong-gi Lee** y el Sr. **Jang-won Kim**, presuntamente secuestrados el 20 de noviembre de 1965, cuando el *Myeongdeok-ho*, el barco pesquero en el que trabajaban, fue supuestamente capturado por fuerzas de la República Popular Democrática de Corea en el mar del Japón.

#### **Información facilitada por el Gobierno**

52. El 7 de octubre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a un caso pendiente. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer el caso.

## **12. República Dominicana**

#### **Información facilitada por el Gobierno**

53. El 2 de julio de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a un caso pendiente. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer el caso.

#### **Observaciones**

54. El Grupo de Trabajo desea recordar que, en virtud de su mandato humanitario, puede ocuparse de casos incluso aunque estén siendo examinados por otros mecanismos de derechos humanos.

## **13. Guatemala**

#### **Denuncia general**

55. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas acerca de los obstáculos con que tropezaba la aplicación en Guatemala de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

56. Al parecer, durante el conflicto armado en Guatemala (1962–1996), las fuerzas de seguridad del Estado recurrían de manera sistemática a la desaparición forzada de personas. Según la información recibida, más de 45.000 personas fueron víctimas de desaparición



forzada; pocos de esos casos se han resuelto y dado lugar al debido procesamiento y la condena de los responsables.

57. La fuente señala que, desde 2009 se han realizado avances considerables en lo que respecta a la investigación, la detención y el castigo de algunos de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, entre ellas desapariciones forzadas. Las fuentes citan el ejemplo de las condenas impuestas en los casos de Choatalúm (2009), el Jute (2009) y Edgar Fernando García (2010) por el delito de desaparición forzada.

58. Según las denuncias, dichos avances eran el resultado del impulso constante y decidido generado por las víctimas y sus representantes, así como del papel determinante desempeñado por ciertos magistrados y jueces. A ese respecto, la fuente destacó la decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Guatemala, adoptada a instancias de un fiscal de distrito, de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueran de ejecución inmediata en los casos de vulneración grave de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, y de que se ordenase a las autoridades reabrir o proseguir la investigación de dichos casos, que llevaba varios años suspendida. Asimismo, en el año 2009 fueron creados el Juzgado de Primera Instancia y el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, también conocidos como "de Mayor Riesgo" o "de Alto Impacto" en virtud de su competencia para conocer de este tipo de casos cometidos en cualquier lugar del Estado. Desde 2011, estos juzgados han pronunciado varias sentencias condenatorias contra miembros de la policía, las fuerzas armadas y grupos paramilitares implicados en delitos graves y en violaciones de los derechos humanos, entre ellos varios responsables de la masacre de Plan de Sánchez y los responsables de las desapariciones forzadas de Edgar Enrique Sáenz Calito (2012) y de Edgar Leonel Paredes Chegüen (2013).

59. No obstante lo anterior, la fuente añade que este pequeño avance corre peligro de echarse a perder, debido a la nueva postura del Estado en materia judicial, con arreglo a la cual no se procede a investigar las desapariciones forzadas y debe hacerse caso omiso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad internacional del Estado en los casos de desaparición forzada.

60. En particular, según la fuente, Guatemala afirma que no es posible investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado porque el delito de desaparición forzada no era punible por ley durante el período en cuestión, y porque los hechos habrían prescrito. Según la fuente, Guatemala adujo ante el Comité contra la Tortura y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los presuntos incidentes denunciados como delitos de desaparición forzada eran imposibles de definir en la legislación penal, pues habían tenido lugar antes de que entrara en vigor el decreto por el que se había modificado el Código Penal y tipificado como delito la desaparición forzada (Decreto N° 33-96), además de que debían tenerse en cuenta y respetarse plenamente las garantías procesales relativas a la retroactividad del derecho penal.

61. La fuente denuncia además que el Estado mantiene que la investigación penal de las desapariciones estaría prohibida por la Ley de amnistía. El argumento del Estado, documentado por la fuente, era que las negociaciones de paz habían autorizado la investigación histórica sin consecuencias judiciales, y el Gobierno y las guerrillas habían negociado un acuerdo de amnistía con la participación de las Naciones Unidas y el apoyo de países amigos. Dicha amnistía había sido objeto de debate público y había sido aprobada por el Congreso. De no haberse firmado ese acuerdo, no habría habido paz ni habría finalizado el conflicto armado. Tras la aprobación del acuerdo de amnistía se habían incoado procesos judiciales que se consideraron ajenos al contexto de lo negociado y convenido en lo tocante a las excepciones recogidas en el texto del acuerdo de amnistía. Según la fuente, esta postura implica además que el Estado se niega a acatar las sentencias

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de desaparición forzada en los que la Corte ordenó la adopción de una serie de medidas de reparación, entre ellas una investigación exhaustiva de los hechos con el fin de identificar, procesar y condenar a los responsables. El Estado también aduce que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es competente en la materia *ratione temporis*.

62. La fuente añade que la postura del Estado ante los citados órganos no es aislada ni accidental, sino que representa la "nueva" postura de las autoridades guatemaltecas en lo que respecta a las graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado. Según las autoridades, tanto los órganos internacionales como los nacionales carecerían de competencia para entender de los casos de desaparición forzada.

63. La fuente también manifestó su inquietud ante la resolución de la Corte Constitucional de 20 de mayo de 2013 que dejó sin efecto la condena de Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La fuente alega que hay un profundo sentimiento de frustración entre las víctimas y sus familiares, quienes, transcurridos seis meses desde la anulación del fallo, siguen esperando que vuelva a celebrarse el juicio.

64. Por último, la fuente sostiene que en Guatemala no hay ningún sistema para obtener la información genética que permitiría determinar el paradero de los desaparecidos y establecer sus identidades. Según la fuente, tampoco hay apoyo estatal suficiente para la búsqueda, exhumación e identificación de desaparecidos.

## 14. Guinea

### Procedimiento ordinario

65. El Grupo de Trabajo transmitió dos casos con arreglo a su procedimiento ordinario.

66. El primer caso se refería al Sr. **Ibrahima Bah**, presuntamente secuestrado el 28 de septiembre de 2009 por agentes de las fuerzas del orden, posiblemente Boinas Rojas, cuando se hallaba en el estadio de Conakry.

67. El segundo caso se refería al Sr. **Mamadou Sow**, que al parecer había sido visto por última vez el 28 de septiembre de 2009 en el estadio de Conakry. Según la información recibida, el Sr. Sow estaba participando en una manifestación celebrada en el estadio y desapareció luego de iniciarse un tiroteo.

## 15. India

### Información facilitada por el Gobierno

68. El 8 de agosto de 2013, el Gobierno transmitió una respuesta a un llamamiento urgente enviado el 28 de septiembre de 2012 en relación con la reanudación del hostigamiento padecido por los miembros del Movimiento Popular contra la Energía Nuclear y otros defensores de los derechos humanos, en el cual se indicaba que al parecer se desconocían la suerte y el paradero de tres personas. En su respuesta, el Gobierno indica lo siguiente:

El Tribunal Supremo del estado de Tamil Nadu (...) observó que los manifestantes habían causado desperfectos en la propiedad pública, obligado mediante amenazas al cierre de establecimientos comerciales, causado daños en vehículos y obligado [a miembros de la] ciudadanía a plegarse a su punto de vista. La operación policial llevada a cabo contra los manifestantes cerca de la central de Koodankulam tenía por objetivo restablecer el orden público en la zona.

[El Tribunal Supremo] también examinó las denuncias de uso excesivo de la fuerza presentadas contra la policía y determinó que se había respetado el principio de proporcionalidad. Así pues, estas pretensiones fueron desestimadas por el Tribunal Supremo. A la luz de lo anterior (...) las denuncias recogidas en el llamamiento urgente conjunto carecen de fundamento.

69. El 28 de agosto de 2003, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a un caso pendiente. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer el caso.

#### **Observaciones**

70. El Grupo de Trabajo desea dar las gracias al Gobierno por su respuesta al llamamiento urgente y recordar lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Declaración, a saber: "Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a [una autoridad estatal competente e independiente] para que inicie [de inmediato una investigación exhaustiva e imparcial], aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna".

## **16. Indonesia**

#### **Información facilitada por las fuentes**

71. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente.

#### **Denuncia general**

72. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas acerca de los obstáculos con que tropezaba la aplicación en Indonesia de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

73. La fuente señaló que el 30 de septiembre de 2009, el Parlamento de Indonesia había recomendado al Presidente y el Gobierno que pusieran en práctica las siguientes recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM):

a) Que el Presidente estableciera un tribunal dedicado expresamente a los derechos humanos para las desapariciones de activistas que habían tenido lugar en 1997 y 1998;

b) Que el Presidente y las instituciones conexas trataran de determinar el paradero de los 13 activistas aún desaparecidos;

c) Que el Gobierno indemnizara y rehabilitara a los familiares de las víctimas;

d) Que el Gobierno ratificara la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

74. La fuente alega que, aunque el proceso de ratificación de la Convención está en marcha, las otras tres recomendaciones aún no se han aplicado. Al parecer el Defensor del Pueblo de la República de Indonesia, actuando a solicitud de las familias de los desaparecidos, ha determinado que el Presidente incurrió en una mala administración e infringió el principio de la buena gobernanza al no dar seguimiento a las recomendaciones del Parlamento.

75. La fuente alega que la no aplicación de las recomendaciones del Parlamento constituye una infracción de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y obstruye el derecho de los familiares de los desaparecidos a la verdad, a la justicia y a una reparación.

## 17. Iraq

### Acción urgente

76. El 10 de septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una comunicación relativa a siete casos, referidos a siete residentes del campamento de Ashraf, a saber, la Sra. **Mahnaz Azizi**, la Sra. **Vajihe Karbalaey**, la Sra. **Lila Nabahat**, la Sra. **Zahra Ramezany**, la Sra. **Fatehma Sakhie**, la Sra. **Fatemeh Tahoori** y el Sr. **Mohammad Ratebi**, presuntamente secuestrados por fuerzas iraquíes el 1 de septiembre de 2013 mientras se hallaban en el campamento.

### Información facilitada por el Gobierno

77. El 4 de noviembre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a siete casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

### Información facilitada por las fuentes

78. Las fuentes facilitaron información sobre siete casos pendientes.

## 18. Kazajstán

### Llamamientos urgentes

79. El 30 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un llamamiento urgente relativo a la presunta desaparición del poeta y activista social Sr. **Aron Atabek** mientras se hallaba privado de libertad.

## 19. Kenya

### Carta de intervención inmediata

80. El 31 de julio de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una carta de intervención inmediata relativa a los presuntos actos de acoso e intimidación dirigidos contra familiares de víctimas de desapariciones forzadas y ocho defensores de los derechos humanos en relación con su cooperación con el Grupo de Trabajo.

81. El 26 de septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió otra carta de intervención inmediata relativa al homicidio del Sr. **Peter Wanyama Wanyonyi**, abogado especializado en derechos humanos, a los presuntos actos de acoso e intimidación dirigidos contra familiares de víctimas de desapariciones forzadas y defensores de los derechos humanos en relación con su cooperación con el Grupo de Trabajo.

### Observaciones

82. El Grupo de Trabajo expresa su profunda preocupación ante el presunto homicidio de un abogado especializado en derechos humanos y los actos de acoso e intimidación dirigidos contra familiares de víctimas de desapariciones forzadas a que se aludía en las cartas de intervención inmediata. A este respecto, el Grupo de Trabajo desea recordar el artículo 13 de la Declaración, según el cual "[s]e tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación [de una desaparición forzada], incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia" (párr. 3) y "[s]e tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda

forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda" (párr. 5). El Grupo de Trabajo también desea reiterar que, en su resolución 21/4, el Consejo de Derechos Humanos instó a los Estados a que adoptasen medidas para proteger adecuadamente a los testigos de desapariciones forzadas o involuntarias, a los defensores de los derechos humanos que luchaban contra las desapariciones forzadas y a los abogados y las familias de las personas desaparecidas contra todo acto de intimidación, persecución, represalia o malos tratos de que pudieran ser objeto.

## **20. República Democrática Popular Lao**

### **Información facilitada por el Gobierno**

83. El 23 de octubre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a dos casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

### **Información facilitada por las fuentes**

84. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente.

## **21. Libia**

### **Procedimiento ordinario**

85. El Grupo de Trabajo transmitió un caso que hacía referencia al Sr. **Malik Idris Mohamed al-Fassi**, que al parecer había sido visto por última vez el 27 de enero de 2012 en una mezquita de la ciudad de Emsallata tras las oraciones del viernes. El Sr. Al-Fassi habría sido detenido por milicianos de la Katiba Rebelde de Emsallata.

## **22. México**

### **Denuncia general**

86. El 13 de septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una denuncia general al Gobierno.

87. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas acerca de los obstáculos con que tropezaba la aplicación en México de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

88. Las fuentes comunicaron que el 20 de diciembre de 2012 se había publicado una lista, supuestamente elaborada por la Procuraduría General de la República, que cifraba en 20.851 el total de víctimas de desapariciones forzadas en los seis años anteriores. Según las fuentes, en febrero de 2013 el Gobierno publicó partes de esa misma base de datos que, en el momento de ser publicadas, contenían 16.121 entradas.

89. Las fuentes añadieron que la lista podría no ser completa ni exacta: algunos de los desaparecidos podrían haber regresado a sus domicilios y algunas desapariciones podrían haber quedado sin denunciar por las familias. Asimismo, la lista al parecer contenía una amplia variedad de casos y no distinguía entre quienes habían sido objeto de una desaparición forzada y las personas extraviadas, las víctimas de delitos comunes, como el secuestro, las personas que podrían haberse ausentado voluntariamente y aquellas que no recordaban su identidad. Además, las personas que aparecían posteriormente no siempre se eliminaban de la lista, mientras que muchos casos de desaparición documentados por

organizaciones dedicadas a los derechos humanos no figuraban en ella. Las fuentes añadieron que, aun con todos estos problemas, la lista evidenciaba claramente que miles de mexicanos habían sido objeto de desapariciones forzadas y que el Gobierno estaba al corriente.

90. Según las fuentes, la lista contiene información detallada de cada persona extraviada o víctima de una desaparición forzada, como la edad, el sexo, la fecha y lugar de la desaparición, la ropa que llevaba, su oficio y otra información somera. La lista, presentada en columnas de Microsoft Excel, fue supuestamente elaborada por la Procuraduría General de la República con datos facilitados por procuradores estatales e investigados por el Gobierno federal.

91. Las fuentes añaden que la lista parece confirmar el número de desapariciones y los problemas del proceso de identificación documentados por otras instituciones. Afirman que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más de 7.000 víctimas de homicidios cometidos en México en los últimos seis años yacen sin identificar en las cámaras frigoríficas de la morgue o en tumbas comunes. La Comisión indicó que entre 2006 y mediados de 2011 se había denunciado la desaparición de más de 18.000 mexicanos.

92. Según las fuentes, el Congreso de México promulgó una ley para la creación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Esta ley exige al Gobierno que cree una base de datos nacional que sirva para hacer un seguimiento de las desapariciones. Según las fuentes, la reglamentación del Registro tardó varios meses en aprobarse y aún no se ha llevado a la práctica plenamente.

93. Las fuentes también afirmaron que la lista demostraba que las autoridades no aplicaban una metodología ni unos procedimientos claros para recabar a nivel nacional datos fiables sobre las denuncias de desaparición forzada. A decir de las fuentes, esta carencia iba en detrimento de la investigación eficaz de las desapariciones forzadas y de la capacidad de localizar e identificar a las víctimas.

94. Por último, las fuentes indicaron que el Gobierno se había comprometido a retirar de la lista las inscripciones que no guardaran relación con casos de desaparición en curso, aunque aún no estaba claro qué metodología se aplicaría y no se habían mostrado resultados.

## **23. Marruecos**

### **Información facilitada por el Gobierno**

95. El 18 de septiembre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa al descubrimiento de los restos de ocho personas que al parecer habían sido enterradas en una fosa común de Fadret Leguiaa.

### **Denuncia general**

96. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas acerca de los obstáculos con que tropezaba la aplicación en Marruecos de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

97. Se ha señalado que entre 1975 y 1993 se produjeron en el territorio del Sáhara Occidental más de 400 desapariciones atribuibles a las fuerzas de seguridad marroquíes. En torno al 80% de esas desapariciones habrían ocurrido entre 1975 y 1977.

98. Se denuncia que, en febrero de 2013, se encontraron restos humanos en Fadret Leguiaa, en la región de Smara, cerca de Amgala y Meheris, en una zona sometida a la supervisión de la Misión de las Naciones Unidas para el *Referendum* del Sáhara Occidental (MINURSO). Al parecer, un equipo de investigadores forense encontró en 2 tumbas los restos de 8 personas. El equipo de investigadores llegó a la conclusión, basada en análisis antropológicos y genéticos, de que los restos pertenecían a 8 personas, 2 de ellas menores de edad, que habían sido ejecutadas por arma de fuego y enterradas a poca profundidad. Las víctimas eran beduinos que se ganaban la vida con el pastoreo de camellos y cabras. Según la fuente, este caso corresponde a unas ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar el 12 de febrero de 1976 y que fueron denunciadas por un testigo.

99. También se denuncia que el informe de la Comisión de la Equidad y la Reconciliación (IER) y otros informes preparados por el Consejo Consultivo de Derechos Humanos (CCDH) no dan cuenta adecuadamente de los casos de esas personas desaparecidas. Facilitan información sobre 4 de las 8 personas identificadas, pero no sobre las otras 4, a pesar de que haber sido detenidas el mismo día y en el mismo lugar, y de que 1 familiar de 1 de ellas presentó una petición ante la IER el 25 de noviembre de 2003 y otra el 13 de diciembre de 2004, ninguna de las cuales recibió seguimiento alguno. La fuente señala además que la información facilitada sobre 4 de los 8 casos es imprecisa, pues afirma que estas personas fueron detenidas en Amgala y luego conducidas al cuartel del Smara donde murieron mientras se encontraban privadas de libertad.

100. La fuente señala que hay fosas comunes en otros lugares bien conocidos que han sido identificados por familiares o supervivientes. La mayoría se sitúan en el territorio del Sáhara Occidental, administrado *de facto* por Marruecos. Es posible que haya otras cerca de centros de detención de Marruecos. La fuente indica en particular que se ha denunciado la existencia de una fosa común en Lemsayed, pero que el Estado nunca ha investigado esta información.

101. La fuente denuncia también que el derecho de las familias a la información no se respetó, que no se ha iniciado ninguna investigación y que los autores siguen impunes.

102. Según la fuente, la mayoría de los familiares de los desaparecidos viven en campamentos de refugiados y se trata sobre todo de mujeres. La fuente denuncia además que esas víctimas no han visto reconocidas en modo alguno las violaciones de los derechos humanos de que fueron objeto, y no han tenido acceso a información ni a los trámites para solicitar el inicio de una investigación. Al parecer, también se excluyó a los familiares de todo contacto con instituciones tales como el Comité de Arbitraje, la IER o la CCDH, por lo que les era imposible presentar denuncias y obtener indemnizaciones, algo que sí podían hacer los residentes en el territorio del Sáhara Occidental.

103. Según otra fuente que hace referencia a los mismos hechos, el descubrimiento realizado por el equipo de forenses puso de manifiesto tanto las limitaciones de la IER y de la labor realizada por la CCDH para descubrir la verdad acerca de cientos de desapariciones forzadas en Marruecos y el Sáhara Occidental, como la necesidad de un mayor número de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas. La misma fuente denuncia además que la IER ha hecho aumentar el sentimiento de marginación de los saharauis porque no se ocupó del particular abanico de violaciones de que son objeto, no reconoció que el sufrimiento de la región fue desproporcionado y no restableció los lazos de confianza con las víctimas, las familias y las organizaciones de la sociedad civil del Sáhara Occidental.

#### Observaciones

104. El Grupo de Trabajo desea dar las gracias al Gobierno por la información facilitada.

## 24. Namibia

### Información facilitada por las fuentes

105. Las fuentes facilitaron información sobre tres casos pendientes. Gracias a esa información se esclareció un caso.

### Esclarecimiento

106. Gracias a la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer un caso.

## 25. Nepal

### Acción urgente

107. El 28 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un caso relativo al Sr. **Dasarath Yadav**, presuntamente secuestrado el 20 de junio de 2013 por las policías nepalí e india mientras se hallaba en su domicilio. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, el Gobierno de la India recibió una copia de este caso.

## 26. Pakistán

### Acción urgente

108. El 5 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un caso relativo a al Sr. **Bijjar Ahmed**, presuntamente secuestrado por miembros de los servicios de inteligencia del Pakistán el 24 de junio de 2013 en el puesto de control de Karobi, cerca de la zona de Rabi en Dera Allah Yar, Baluchistán, mientras viajaba de vuelta a su domicilio en un autobús rumbo a Sindh.

109. El caso fue esclarecido posteriormente a partir de la información facilitada por las fuentes.

### Procedimiento ordinario

110. El Grupo de Trabajo transmitió 11 casos al Gobierno en virtud de su procedimiento ordinario.

111. El primer caso se refería al Sr. **Muhammad Ramzan Quraish**, presuntamente secuestrado el 24 de julio 2010 por un agente de policía y otros individuos vestidos de civil, supuestamente pertenecientes a la Inteligencia Militar o a los Servicios de Inteligencia Conjunta, en el "punto cero" de Uthal cerca de la parada donde esperaba el autobús.

112. El segundo caso se refería al Sr. **Zafarullah Bangulzai**, presuntamente secuestrado en Quim Khan Baduzai, en una aldea de Dasht Tehsil, Mastung, distrito de Mastung, el 13 de julio de 2010 por miembros uniformados de la Guardia Fronteriza y por miembros de los servicios de inteligencia que iban vestidos de civil y con la cara cubierta.

113. El tercer caso se refería al Sr. **Abdul Wahid**, presuntamente secuestrado en la medianoche del 2 de junio de 2010, mientras se encontraba en su domicilio, por unos cincuenta individuos uniformados supuestamente pertenecientes a la Guardia Fronteriza.

114. El cuarto caso se refería al Sr. **Dad Muhammad**, presuntamente secuestrado en la medianoche del 2 de junio de 2010, mientras se encontraba en su domicilio, por unos cincuenta individuos uniformados supuestamente pertenecientes a la Guardia Fronteriza. Al parecer, los presuntos autores habrían llegado en vehículos oficiales.



115. El quinto caso se refería al Sr. **Farmanullah**, presuntamente secuestrado en Jafar Abad Killi, Shah Daizai, Shah Jee Hotel, Quetta, el 26 de junio de 2010 por individuos uniformados supuestamente pertenecientes a los servicios de inteligencia.

116. El sexto caso se refería al Sr. **Sahib Khan**, presuntamente secuestrado el 7 de marzo de 2010 por individuos supuestamente pertenecientes a la Guardia Fronteriza.

117. El séptimo caso se refería al Sr. **Manzoor Ahmed**, presuntamente secuestrado en el mercado de Killi Kachi Bay Shahwani, cerca de la casa Haq Baho, Seryab, Quetta el 26 de marzo de 2010 por individuos supuestamente pertenecientes a la Guardia Fronteriza.

118. El octavo caso se refería al Sr. **Zubirahmed Baloch**, presuntamente secuestrado en la zona de Boodaeg Kaur, Mand, Baluchistán, el 5 de mayo de 2011 por individuos supuestamente pertenecientes a la Guardia Fronteriza.

119. El noveno caso se refería al Sr. **Hameed Baloch**, presuntamente secuestrado en la noche del 20 de abril de 2011, mientras se encontraba en su domicilio, por individuos supuestamente pertenecientes a la Guardia Fronteriza.

120. El décimo caso se refería al Sr. **Mazar Khan**, presuntamente secuestrado cerca de la estación de Killi Mafzal, Noshki, el 19 de diciembre de 2009 por miembros de los Servicios de Inteligencia Militar vestidos de civil.

121. El 11º caso se refería al Sr. **Ghaffar Abdul Ghafoor Mengal**, presuntamente secuestrado el 20 de diciembre de 2009, mientras regresaba a su domicilio, por individuos supuestamente pertenecientes a la Guardia Fronteriza.

#### **Información facilitada por el Gobierno**

122. El 11 de octubre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación en la que solicitaba información sobre un caso pendiente.

#### **Información facilitada por las fuentes**

123. Las fuentes facilitaron información sobre dos casos pendientes. Gracias a ello, se esclarecieron ambos casos.

#### **Esclarecimiento**

124. Gracias a la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer dos casos.

## **27. Perú**

#### **Acción urgente**

125. El 2 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un caso, relativo al Sr. Bruno Carlos Schell, que al parecer fue visto por última vez el 4 de junio de 2013 frente al restaurante Salto del Fraile, cerca de unos acantilados que hay junto al mar en Chorrillos, una zona despoblada de la región de Lima. Según la fuente, la presunta desaparición del Sr. Schell podría ser obra de agentes de la oficina de Seguridad Ciudadana de Miraflores (subgerencia de Serenazgo). De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, el Gobierno de la Argentina recibió una copia de este caso.

#### **Información facilitada por el Gobierno**

126. El Grupo de Trabajo siguió tramitando la información que había transmitido el Gobierno el 11 de julio de 2011. Se examinó información relativa a 25 casos pendientes, que se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

## **28. Federación de Rusia**

### **Llamamientos urgentes**

127. El 5 de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un llamamiento urgente relativo a la situación de la Sra. **Nadezhda Tolokonnikova**, y a las denuncias de que ni su familia ni sus representantes legales sabían en qué lugar se encontraba recluida.

## **29. Arabia Saudita**

### **Información facilitada por las fuentes**

128. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente. Gracias a esa información se esclareció el caso.

### **Esclarecimiento**

129. Gracias a la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer un caso.

## **30. Senegal**

### **Información facilitada por el Gobierno**

130. El 1 de octubre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a un caso pendiente. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer el caso.

### **Información facilitada por las fuentes**

131. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente.

## **31. España**

### **Procedimiento ordinario**

132. El Grupo de Trabajo transmitió un caso, relativo al Sr. **Teófilo Alcorisa Monleón**, que al parecer había sido visto por última vez en abril de 1947 en Utiel, Cuenca (España). Según la fuente, la Guardia Civil podría ser responsable de la presunta desaparición.

## **32. Sri Lanka**

### **Procedimiento ordinario**

133. El Grupo de Trabajo transmitió siete casos al Gobierno en virtud de su procedimiento ordinario.

134. El primer caso se refería al Sr. **Subramaniam Sodmivadivel**, que al parecer había sido visto por última vez el 4 de diciembre de 2007 en Uranee, Batticaloa, en la Provincia Occidental de Sri Lanka. Según la fuente, la desaparición podía haber sido obra de miembros de los servicios de inteligencia asignados al campamento militar conocido con el nombre de "Polvo de Dientes" (Tooth Powder Camp).

135. El segundo caso se refería al Sr. **Nagamuthu Sripavan**, que al parecer había sido visto por última vez el 24 de abril de 2006 en Madduvil Norte, cerca del templo de Panrithalaichchi Amman, en la carretera entre Puttur y Chavakachcheri, en

Chavakachcheri. Según la información recibida, el Sr. Sripavan iba en moto al trabajo cuando al parecer las fuerzas de seguridad le dieron el alto y lo detuvieron en Madduvil Norte, una zona que por aquel entonces estaba supuestamente bajo el control total del ejército.

136. El tercer caso se refería al Sr. **Sukirthan Patkunathan**, que al parecer había sido visto por última vez el 13 de febrero de 2007 en la carretera de Karli Kovil, Thirunelveli, distrito de Jaffna. Según la información recibida, la presunta desaparición del Sr. Patkunathan sería, al parecer, obra de militares pertenecientes al campamento de Urelu.

137. Los casos cuarto y quinto se referían al Sr. **Vishnukamar Nadesamoorthy**, conocido también como Paheerathan, y al Sr. **Thevalingam Ambalanatham**, que al parecer habían sido vistos por última vez el 18 de mayo de 2009 en Vettuvahal, distrito de Mullaitivu. Según la información recibida, antes de la presunta desaparición, el Sr. Nadesamoorthy se habría rendido en Vettuvahal al Ejército de Sri Lanka junto con otros 80 miembros de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE).

138. El sexto caso se refería al Sr. **Sivarajasingham Valli**, que al parecer había sido visto por última vez el 17 de mayo de 2009 en Vettuvahal, distrito de Mullaitivu. Según la información recibida, el Sr. Valli se habría rendido en Vettuvahal al Ejército de Sri Lanka junto con otros dirigentes de los LTTE.

139. El séptimo caso se refería al Sr. **Thushishanker Kandasamy**, que al parecer había sido visto por última vez el 17 de mayo de 2009 en Vettuvahal, distrito de Mullaitivu. Según la información recibida, el Sr. Kandasamy estaba herido y fue entregado al ejército de Sri Lanka en Vettuvahal junto con otros 20 heridos.

#### Información facilitada por el Gobierno

140. El 11 de marzo de 2013, el Gobierno transmitió una respuesta a la denuncia general enviada en mayo de 2011 con respecto a los graves obstáculos con que tropezó en Sri Lanka la aplicación de la Declaración durante la última fase de la guerra contra los LTTE (de 2006 a 2009). En su respuesta, el Gobierno indicó lo siguiente:

El Gobierno es incapaz de responder a todas las denuncias de carácter general si no se le facilitan detalles concretos sobre los casos de presunta desaparición, tortura, etc. (...)

Se ha establecido un grupo de trabajo interministerial para verificar los casos de presunta desaparición (...) Se informa sobre estos casos en el informe nacional de Sri Lanka correspondiente al examen periódico universal de 2012. El Gobierno ha adoptado medidas para investigar todas las denuncias de presunta desaparición, incluidas las relativas a la última fase del conflicto. (...) También se ha nombrado un comité de trabajo interinstitucional que se dedica sin descanso a verificar este tipo de casos. Este comité está efectuando investigaciones adicionales en relación con el resto de las denuncias. Además (...) también se ha nombrado un comité de trabajo, dirigido por un inspector general adjunto de la Policía, para efectuar verificaciones sobre el terreno a fin de esclarecer los hechos en cuestión.

141. El 16 de octubre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a tres casos pendientes. Basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió en su 101º período de sesiones aplicar la norma de los seis meses a uno de los casos. En cuanto a los casos restantes, la información facilitada se consideró insuficiente para esclarecerlos.

#### Información facilitada por las fuentes

142. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente.

**Esclarecimiento**

143. Gracias a la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer tres casos pendientes tras la expiración del período prescrito por la norma de los seis meses.

**Observaciones**

144. El Grupo de Trabajo desea dar las gracias al Gobierno por su respuesta a la denuncia general. El Grupo de Trabajo reconoce las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para investigar los casos de presunta desaparición forzada. A este respecto, el Grupo de Trabajo alienta al Gobierno de Sri Lanka a seguir investigando todos los casos de presunta desaparición forzada y reitera que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Declaración, se "procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias de desaparición forzada", la cual debe ser efectuada por una "autoridad estatal competente e independiente", y que las presuntas desapariciones forzadas deberán poder investigarse "mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima".

**33. Sudán****Llamamientos urgentes**

145. El 17 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un llamamiento urgente en relación con supuestas violaciones de los derechos humanos, entre otras cosas el amplio recurso al encierro en régimen de aislamiento tras las manifestaciones que tuvieron lugar en numerosas ciudades del Sudán.

**Información facilitada por el Gobierno**

146. El 22 de agosto de 2013, el Gobierno transmitió una respuesta a un llamamiento urgente enviado el 16 de abril de 2013 en relación con el encierro en régimen de aislamiento del Sr. **Hatim Ali Mohammed** y el Sr. **Sharf Eldein Tia**, y con la información de que al parecer se desconocían la suerte y el paradero de ambos. En su respuesta, el Gobierno indicó que el Sr. Tia nunca había sido detenido por los servicios de la seguridad nacional ni por ninguna otra fuerza del orden. En cuanto al Sr. Hatim Ali Mohammed, el Gobierno indicó que "fue detenido el 25 de marzo de 2013 debido a la existencia *prima facie* de indicios de infracción de algunos artículos de la Ley del derecho penal de 1991. (...) el Sr. Hatim Ali fue puesto en libertad el 25 de abril de 2013".

**Observaciones**

147. El Grupo de Trabajo desea dar las gracias al Gobierno por su respuesta al llamamiento urgente conjunto, y acoge con reconocimiento la información según la cual el Sr. Hatim Ali fue puesto en libertad el 25 de abril de 2013. En cuanto a la afirmación de que se desconocen la suerte y el paradero del Sr. Tia, el Grupo de Trabajo desea recordar el artículo 13 de la Declaración, donde se establece que "[t]oda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a [la] autoridad [competente] para que inicie una investigación".

**34. República Árabe Siria****Acción urgente**

148. El Grupo de Trabajo transmitió cuatro casos mediante su procedimiento de acción urgente.

149. El 2 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un caso, relativo a la Sra. **Dania Yakoub**, presuntamente secuestrada el 7 de agosto de 2013 en un puesto de control del Gobierno por agentes de los servicios de seguridad (*mukhabarat*). Este caso fue esclarecido posteriormente a partir de la información facilitada por las fuentes.

150. El 18 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió otro caso, relativo a la Sra. **Safi Farah**, presuntamente detenida el 12 de agosto de 2013 en el Hospital de la Caridad y los Servicios Sociales (Hospital de Al-birr), Nueva Homs, Homs (República Árabe Siria) por "personal de la seguridad del Estado" de Homs.

151. El 13 de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una tercera comunicación, relativa a dos casos. El primero se refería a la Sra. **Marwa Tuffaha**, presuntamente secuestrada el 4 de octubre de 2013, mientras se hallaba en su domicilio en Rouk al-Deen, Damasco, por agentes del Servicio de Seguridad de las Fuerzas Aéreas. El segundo caso se refería al Sr. **Muhammad Tuffaha**, que al parecer había sido visto por última vez el 26 de octubre de 2013 en el puesto de control de Al-Thawra en compañía de agentes del Servicio de Seguridad de las Fuerzas Aéreas.

#### Procedimiento ordinario

152. El Grupo de Trabajo transmitió un caso, relativo al Sr. **Hussam Youssef**, que al parecer había sido visto por última vez a principios de abril de 2013 en el Centro de Adiestramiento Inicial dependiente del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, cerca de Najhah, una población situada junto a la autopista que lleva al Aeropuerto Internacional de Damasco (carretera de Damasco a As-Suwayda).

#### Llamamientos urgentes

153. El 16 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un llamamiento urgente relativo a la presunta desaparición forzada del Sr. **Bassam Bahrah** y el Sr. **Sameeh Bahrah**.

154. El 29 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió otro llamamiento urgente, relativo a la presunta desaparición forzada del Sr. **Youssef Abdelke** y el Sr. **Adnan al-Dibs**, así como a la presunta detención del Sr. **Toufiq Umran**. Los tres son miembros del Órgano de Coordinación Nacional para el Cambio Democrático y recientemente firmaron una declaración en la que se reclamaba un cambio democrático pacífico en la República Árabe Siria. El Sr. Abdelke también ha criticado en los medios de difusión algunas decisiones del Gobierno de la República Árabe Siria.

#### Información facilitada por las fuentes

155. Las fuentes facilitaron información sobre tres casos pendientes. Gracias a ello se esclarecieron dos casos.

#### Esclarecimiento

156. Gracias a la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer dos casos.

#### Observaciones

157. Preocupan profundamente al Grupo de Trabajo las nuevas denuncias de desapariciones forzadas en la República Árabe Siria. A este respecto, el Grupo de Trabajo desea recordar los artículos 2 y 3 de la Declaración, donde se establece que "[n]ingún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas" (art. 2, párr. 1) y que "[l]os Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción" (art. 3).

### 35. Tayikistán

#### Información facilitada por el Gobierno

158. El 7 de febrero 2013 y el 13 de junio de 2013, el Gobierno transmitió dos comunicaciones relativas a cuatro casos pendientes. Basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió en su 101º período de sesiones aplicar la norma de los seis meses a uno de los casos. En cuanto a los demás casos, la información facilitada se consideró insuficiente para esclarecerlos.

### 36. Tailandia

#### Procedimiento ordinario

159. El Grupo de Trabajo transmitió dos casos, relativos a la Sra. **Oy-Napha Sukprasong** y a su asistente, la Sra. **Wantana Taksima**, presuntamente secuestradas el 2 de diciembre de 2004 por agentes de policía.

#### Información facilitada por las fuentes

160. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente.

### 37. Togo

#### Información facilitada por el Gobierno

161. El 6 de septiembre de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a un caso pendiente. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer el caso.

### 38. Turquía

#### Procedimiento ordinario

162. El Grupo de Trabajo transmitió dos casos en virtud de su procedimiento ordinario.

163. El primer caso se refería al Sr. **Abdubaki Birlik**, que al parecer había sido visto por última vez el 29 de marzo de 1995, poco después de partir camino del centro de la ciudad de Kiziltepe con unos parientes que acababan de salir de la cárcel. Según la información recibida, el Sr. Birlik habría sido secuestrado por fuerzas del Estado.

164. El segundo caso se refería al Sr. **Mehmet Selim Orhan**, presuntamente secuestrado el 24 de mayo de 1994 por fuerzas del Estado tras una redada efectuada en su aldea por la Unidad de Comandos de Bolu.

#### Información facilitada por el Gobierno

165. El 5 y el 11 de julio de 2013, el Gobierno transmitió 2 comunicaciones relativas a 47 casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

### 39. Ucrania

#### Información facilitada por el Gobierno

166. El 1 de julio de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a cuatro casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

## 40. Emiratos Árabes Unidos

### Acción urgente

167. El 26 de julio de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió un caso, relativo al Sr. **Ibrahim Abdel Magid Hassanin al-Sanhury**, que al parecer había sido visto por última vez el 19 de junio de 2013. Según la fuente, el Sr. Al-Sanhury salió de su domicilio tras recibir una llamada telefónica de los servicios locales de seguridad, que lo instaron a acudir a un lugar desconocido.

168. Este caso fue esclarecido posteriormente a partir de la información facilitada por las fuentes.

### Información facilitada por el Gobierno

169. El 26 de marzo de 2013, el Gobierno transmitió una respuesta a un llamamiento urgente enviado el 7 de noviembre de 2012 en relación con la presunta detención y encierro en masa de jueces, abogados y defensores de los derechos humanos, así como con la denuncia de que se desconocen la suerte y el paradero del Sr. **Ahmad Gaith al-Suwaidi**, el Sr. **Rashid Mohamed Abdullah al-Roken**, el Sr. **Abdullah al-Hajiri**, el Sr. **Juma Darwish al-Felassi**, el Sr. **Ali Saaed al-Kindi** y el Sr. **Khamis Saaed al-Sam al-Zyoudi**. En su respuesta, el Gobierno indicó que "todos los acusados a que se hace referencia son sospechosos de delitos tipificados en el Código Penal Federal y en la Ley de las tecnologías de la información. El ministerio público tomó la decisión de decretar su prisión preventiva tras interrogarlos, respetando plenamente todas las garantías procesales".

### Información facilitada por las fuentes

170. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente. Gracias a ello, el caso se esclareció.

### Esclarecimiento

171. Gracias a la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió esclarecer un caso.

### Observaciones

172. El Grupo de Trabajo desea dar las gracias al Gobierno por su respuesta al llamamiento urgente conjunto.

## 41. Uruguay

### Información facilitada por el Gobierno

173. El 25 de julio de 2013, el Gobierno transmitió una respuesta a la denuncia general enviada el 14 de mayo de 2013 relativa al archivo efectivo o potencial de ciertas causas judiciales referidas a desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones llevadas a cabo durante la dictadura en el Uruguay, como consecuencia de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en las que se consideraban inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18831 (titulada "Pretensión punitiva del Estado"). Dichos artículos hacían posible la investigación y el procesamiento de los delitos cometidos durante la dictadura.

174. El Gobierno recordó que, tras el regreso a la democracia, numerosas víctimas de violaciones de los derechos humanos y familiares suyos habían iniciado actuaciones penales ante las autoridades del poder judicial. No obstante, señaló que la entrada en vigor

de la Ley N° 15848, conocida como Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado había entorpecido la acción de la justicia.

175. El Gobierno indicó que se habían adoptado medidas para corregir esta situación. En este contexto, el Gobierno indicó que la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18831. El Gobierno subrayó que, si bien la inconstitucionalidad se había declarado en relación con un caso concreto, la jurisprudencia de la Suprema Corte en dicha sentencia era tal que este tribunal consideraba que la ley por la que se tipificaba el delito de desaparición forzada no era aplicable de manera retroactiva a los casos ocurridos durante la dictadura militar. El Gobierno señaló con preocupación que esta decisión permitiría considerar prescritos dichos delitos, y que la jurisprudencia creada por la sentencia en cuestión se aplicaría seguramente a otras causas judiciales.

176. El Gobierno transmitió también una comunicación de la Suprema Corte en la que se daba respuesta a cuestiones suscitadas en la denuncia general. La Suprema Corte indicó que no había declarado prescritos los delitos cometidos durante la dictadura militar. En los casos mencionados en la denuncia general, la Suprema Corte se había limitado a examinar la constitucionalidad de los artículos en cuestión de la Ley N° 18831, y la mayoría de sus miembros había concluido que los artículos 2 y 3 no podían aplicarse a esos casos. No obstante, la Suprema Corte subrayó que, con respecto a dichos casos, no había considerado si los hechos habían prescrito. Señaló que esta cuestión debía ser dirimida con total independencia por los tribunales que se ocuparan de esos asuntos.

177. La Suprema Corte declaró además que resultaba inexacto afirmar que las decisiones de la Corte sobre los delitos cometidos hasta marzo de 1985 abocaran al fracaso toda investigación porque la Corte no los considerara crímenes de lesa humanidad y no reconociera la no aplicabilidad de la prescripción, pues de ser así estaría reinstaurando *de facto* los efectos de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

178. La Suprema Corte señaló asimismo que la citada Ley había quedado sin efecto porque la propia Corte la había declarado inconstitucional en un fallo de 2009.

179. Asimismo, la Suprema Corte reiteró que no había ordenado el archivo de causa alguna, ni declarado prescrita ninguna de ellas.

180. En cuanto a la situación actual de las investigaciones judiciales, la Suprema Corte aclaró que no era competente para dar seguimiento a las investigaciones penales en cuestión.

181. Además de transmitir la respuesta de la Suprema Corte, el Gobierno observó que las investigaciones de las causas que se habían vuelto a abrir dependerían de las decisiones del juez correspondiente.

182. En cuanto a la búsqueda de los restos de los desaparecidos, el Gobierno observó que la pretensión punitiva del Estado había quedado restablecida en virtud del artículo 1 de la Ley N° 18831. El Gobierno explicó que la decisión del órgano judicial no había impedido en la práctica que muchos fiscales y jueces mantuvieran abiertas las causas recurriendo a otros mecanismos y normas jurídicas que les permitían sortear los obstáculos. Asimismo, el Gobierno confirmó que brindaría su apoyo al poder judicial con miras a fomentar el avance de las investigaciones.

### Observaciones

183. El Grupo de Trabajo desea dar las gracias al Gobierno por su respuesta a la denuncia general. A este respecto, el Grupo de Trabajo desea recordar el artículo 18, párrafo 1, de la Declaración, donde se establece que "Los autores o presuntos autores de actos [de desaparición forzada] no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras



medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal". El Grupo de Trabajo también desea reiterar que considerar prescrito un delito de desaparición forzada cuando los hechos siguen en curso o cuando la práctica de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad debe considerarse contrario a la Declaración<sup>1</sup>. En el párrafo 5 de su Comentario general N° 9 (2010) sobre la desaparición forzada como delito continuado, el Grupo de Trabajo destacó que "como consecuencia del carácter continuo de la desaparición forzada, es posible condenar a una persona por la desaparición sobre la base de un instrumento jurídico promulgado después de que comenzara la desaparición forzada no obstante el principio fundamental de no retroactividad. No es posible separar el delito, y la condena debe abarcar la desaparición forzada en su conjunto". En su Comentario general N° 10 (2010) sobre el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas, el Grupo de Trabajo destacó que el Estado tiene "la obligación de investigar hasta que se esclarezca la suerte y el paradero de la persona" (párr. 5).

## 42. Uzbekistán

### Información facilitada por el Gobierno

184. El 2 de julio de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a siete casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

### Información facilitada por las fuentes

185. Las fuentes facilitaron información sobre tres casos pendientes.

## 43. Venezuela (República Bolivariana de)

### Información facilitada por el Gobierno

186. El 1 de julio de 2013, el Gobierno transmitió una comunicación relativa a diez casos pendientes. La información facilitada se consideró insuficiente para esclarecer los casos.

## 44. Yemen

### Acción urgente

187. El 19 de septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo transmitió una comunicación con respecto a tres casos, relativos al Sr. **Hareth al-Jaradi**, menor de 18 años presuntamente secuestrado el 24 de julio de 2013, en la entrada de su lugar de trabajo en Shumailah, por individuos armados vestidos de civil, y a sus dos hermanos, el Sr. **Abdullah al-Jaradi** y el Sr. **Hamza al-Jaradi**, también menores de 18 años, presuntamente secuestrados el 22 de agosto de 2013 por individuos armados que se cree pertenecían al ejército y a la policía. Según la información recibida, los secuestros habrían sido ordenados por un oficial del Ejército en relación con un conflicto entre la tribu de las víctimas y dicho oficial.

<sup>1</sup> Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Observación general N° 6 (2005) sobre el artículo 18 de la Declaración, párrs. 3 a) y b).

**Procedimiento ordinario**

188. El Grupo de Trabajo transmitió dos casos con arreglo a su procedimiento ordinario.

189. El primer caso hacía referencia al Sr. **Muhamad Ahmad Abdul Aziz al-Hindi**, presuntamente secuestrado el 19 de agosto de 2011 en las calles de la ciudad de Al-Hota por individuos que, se cree, pertenecían al servicio de seguridad nacional.

190. El segundo caso se refería al Sr. **Ahmed Ghanem Maarouf al-Masraba**, que al parecer había sido visto por última vez el 17 de diciembre de 1981 cuando abandonó su domicilio para entregarse a las autoridades del Yemen del Norte.

---